

C.A. de Santiago

Santiago, veinte de febrero de dos mil veintitrés.

Vistos y considerando:

Primero: Que, don Carlos Freude Moreno, abogado, en representación de Enel Distribución Chile S.A., y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 18.410, interpone recurso de reclamación contra la Resolución Exenta N° 35.447, de 1 de septiembre de 2022, dictada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (en adelante, SEC), que rechazó el recurso de reposición y confirmó la Resolución Exenta N° 11.969, de 26 de abril de 2022, sancionando a su representada con una multa equivalente a la suma de 43.200 Unidades Tributarias Mensuales, esto es, más de \$2.570.000.000, ya que infringe gravemente las leyes y normas administrativas que la rigen; y solicita se deje sin efecto la multa aplicada o se rebaje conforme a las peticiones subsidiarias que formula.

Señala que por la Resolución Exenta N° 11.969, la SEC multó a Enel Distribución Chile S.A. (en adelante, Enel) por haber incumplido los estándares de calidad de suministro que establece el artículo 4-2 de la Norma Técnica de Calidad del Servicio para Sistemas de Distribución (en adelante, Norma Técnica), en relación con los artículos 145 y 221 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos (en adelante, Reglamento) y los artículos 72-14 y 130 de la Ley General de Servicios Eléctricos (en adelante, LGSE), por haber excedido, entre enero y diciembre de 2020, uno de los índices de continuidad del suministro: tiempo medio de interrupción por cliente (SAIDI, por sus siglas en inglés), en las



comunas de Independencia, con un SAIDI de 6,16 horas; La Cisterna, con un SAIDI de 5,12 horas; Lo Espejo, con un SAIDI de 8,36 horas; Lo Prado, con un SAIDI de 6,92 horas; Maipú, con un SAIDI de 6,07 horas; Pedro Aguirre Cerda, con un SAIDI de 5,47 horas; Quinta Normal, con un SAIDI de 5,73 horas y Lampa, con un SAIDI de 11,41 horas, todas de la Región Metropolitana.

La Superintendencia, mediante el Oficio Ordinario N° 93.699, de 8 de noviembre de 2021, formuló a la recurrente los siguientes cargos: “Incumplimiento del establecido en el artículo 4-2 de la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, en relación con los artículos 145° y 221° del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos y, a su vez, en relación a los artículos 74°-14 y 130 de la Ley General de Servicios Eléctricos, lo que se desprende de la información aportada por la empresa en el proceso denominado “Interrupciones 2018”, la cual indica que se ha sobrepasado el límite máximo del SAIDI establecido en la normativa vigente, en la comuna señalada en el punto 4 del presente oficio”.

Señala que presentó sus descargos, fundados en el retraso en la dictación del Decreto Tarifario 5T, la pandemia de Covid-19 y las medidas que tuvo que adoptar y el aumento de campamentos en tres de las comunas cuestionadas, todo lo cual incidió en el en el exceso del índice SAIDI.

Por medio de la referida Resolución Exenta N° 11.969, la SEC rechazó los descargos, imponiendo la multa de 43.200 UTM, calificando la conducta como gravísima, conforme al inciso tercero



del artículo 15 N° 4 de la Ley N° 18.410, al haber “alterado la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio respectivo, más allá de los estándares permitidos por la norma y afecten a lo menos al 5% de los usuarios abastecidos por la infractora”. Sanción que fue confirmada luego por la Resolución Exenta N° 35.447, al rechazar la reposición interpuesta por Enel.

Sostiene el recurso en las ilegalidades en que ha incurrido la Superintendencia al emitir las Resoluciones N° 11.969 y N° 35.447, y que son las siguientes:

Acusa, como primera ilegalidad, la desproporción de la multa aplicada, al omitir las circunstancias excepcionalísimas de la pandemia por Covid-19, contraviniendo así el artículo 16, inciso segundo, letra d) de la Ley N° 18.410, no obstante haberse acreditado que las 8 comunas fiscalizadas fueron objeto de múltiples cuarentenas, con estrictas restricciones de movilidad y extendidas por cerca de 5 meses; que más de 1.400 contratistas quedaron impedidos de desarrollar sus labores, por enfermedad o sospechas de contagios; que la falta de personal impidió ejecutar proyectos y obras destinadas a mejorar la capacidad operativa en las comunas fiscalizadas, como finalizar cerca de 50 trabajos en la red de baja tensión; y que la conexión eléctrica irregular de cerca de 3.884 viviendas de asentamientos informales, en las comunas fiscalizadas, incidieron en los cortes de suministros y en la imposibilidad de la reconexión oportuna.

De esta forma, afirma, las resoluciones impugnadas vulneran el artículo 16, inciso segundo letra d) de la Ley N°18.410, al



desvincular la determinación de la multa de los presupuestos fácticos de la comisión de la infracción imputada. Dicha norma obliga a la Superintendencia, al determinar la sanción, a considerar la intencionalidad y el grado de participación del infractor, como garantía de proporcionalidad, razón por la cual debió valorar los efectos de la pandemia al ponderar el quantum de la multa.

Señala que hizo presente a la Superintendencia que los excesos en los índices se explica en parte considerable por las excepcionalísimas situaciones provocadas por la pandemia, debiendo valorar dichas circunstancias al sancionar, lo que no hizo.

Arguye que las medidas sanitarias adoptadas por la autoridad con motivo de la pandemia, provocaron un primer nivel de afectación, por los criterios restrictivos de otorgamiento y fiscalización de los permisos especiales de traslado de personal de empresas de distribución de energía eléctrica, que afectó el normal funcionamiento de Enel. Un segundo nivel lo constituye el impacto de la enfermedad en los contratistas, por contagio o contacto estrecho de casi 1.400 de trabajadores, que debieron someterse a cuarentenas, lo que afectó el desarrollo de labores en terreno. En un tercer nivel, se halla la afectación en el desarrollo de obras proyectadas y en planificación, que no pudieron realizarse oportunamente por casos de enfermedad o sospecha, que afectaron a trabajadores y contratistas, que redundó en el retraso de las obras, que en el caso de las comunas que aquí interesa sumaban más de 50 proyectos. Y, en cuarto lugar, la afectación provocada tanto por la pandemia como por la crisis económica, que se tradujo en el aumento de campamentos y la conexión irregular de



3.884 viviendas, en las comunas de Lampa, Maipú y Quinta Normal, que impactó la seguridad y calidad del suministro.

Afirma que, al no valorar lo anterior para considerar la intencionalidad y el grado de participación del infractor, la Superintendencia infringe el artículo 16, inciso segundo, letra d) de la Ley N° 18.410, imponiendo a Enel una sanción absolutamente desproporcionada, que infringe directamente los mandatos de razonabilidad y de objetividad, impuestos por el principio de probidad, establecidos en los artículos 53 de la Ley N° 18.575 y 11 de la Ley N° 19.880, respectivamente, incurriendo así en una manifiesta ilegalidad.

Como segunda ilegalidad, denuncia la incorporación de usuarios no afectados por la interrupción de suministro en el cálculo sancionatorio, contraviniendo el inciso tercero del artículo 15 N° 4 y de la letra b) del inciso segundo del artículo 16 de la Ley N° 18.410.

Al sancionar, la Superintendencia consideró y computó como afectados al 22,6% de los clientes abastecidos por Enel, incluyendo a usuarios que mantuvieron su servicio ininterrumpido y en perfectas condiciones, apartándose del mandato legal que la obligaba a considerar solo a los afectados. Este error se aprecia en tres niveles, al considerar como afectados en estas comunas a 405.007 usuarios, y según los registros de la reclamante son 399.833; de éstos, solo 328.826 sufrieron interrupción de servicio; y solo en el caso de 85.227 clientes superó los límites del indicador de TIC en horas (tiempo de interrupciones a clientes).



Afirma que, de esta forma, el porcentaje de usuarios afectados cae del 22,6% al 16,13% de los clientes abastecidos, al excluir clientes que no sufrieron interrupción; y disminuye al 4,18% si se considera a los usuarios afectados por excederse el límite del TIC.

Sostiene que la Resolución Exenta N° 11.969 interpreta erróneamente la Norma Técnica, esto es, la determinación del tiempo medio máximo de interrupción según densidad de la red por comuna, al utilizar la clasificación par comuna-empresa para calcular el porcentaje de afectados en relación con los usuarios de cada comuna y no en relación al total de usuarios de Enel, aumentando artificialmente dicho porcentaje, determinante en el monto de la multa que se le aplica.

Señala que la resolución al considerar incorrectamente como afectados a 405.007 usuarios, esto es, un 22,6% de los usuarios abastecidos por Enel, al incluir un número que excede en 5.174 usuarios a la totalidad de los usuarios de las comunas comprometidas, al incluir a 71.007 usuarios que no sufrieron interrupción de suministro y 314.606 usuarios que no superaron el indicador TIC. Añade que un 16,13% de los usuarios de Enel sufrieron interrupciones (328.826 usuarios de 2.038.172), y sólo en un 4,18% excedieron el límite del TIC, por lo que la resolución adolece de manifiestos vicios de legalidad y proporcionalidad.

Contraviniendo el artículo 16, letra b), de la Ley N° 18.410, que establece que deberá atenderse al “porcentaje de usuarios afectados por la infracción”, la resolución consideró



arbitrariamente al universo total de clientes de cada una de las comunas en las que se hubiere constatado un exceso a los índices SAIDI como clientes afectados, interpretación que califica como arbitraria y contraria al texto expreso de la ley, al momento de calificar la sanción y graduarla, vulnerando así los principio de legalidad y tipicidad que emanan del artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental.

Como tercera ilegalidad, aduce la infracción al deber de motivación de los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, por el rechazo injustificado de la influencia del retraso en la dictación de Decreto Tarifario 5T.

Refiere que el índice que mide la duración de las interrupciones de suministro por comuna, cuyo exceso es sancionado por la Superintendencia, fue incorporado por la Norma Técnica fijada por Resolución Exenta N° 706 de 2017, que elevó los estándares y estableció otras exigencias, la cual suponía el desarrollo de mayores inversiones y gastos para fortalecer la red y mejorar la calidad del suministro, por lo que sujetó su vigencia y la exigibilidad de estos índices al nuevo decreto tarifario 5T, que con su publicación en septiembre de 2018, se configuró un retraso de 10 meses en cuanto a la aplicabilidad de los indicadores y su correlato tarifario, demora no imputable a Enel, que no podía incurrir en mayores inversiones y gastos sin el respectivo correlato en la tarifa, lo que se debió ponderar y valorar en las resoluciones impugnadas.



Como cuarta ilegalidad, acusa que la resolución infringe el deber legal de motivación, al omitir indicar la fórmula empleada para determinar la cuantía de la multa, el que se halla contenido en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, en relación con el principio de transparencia consagrado en los artículos 16 de la misma ley y 13 de la Ley N° 18.575.

Afirma que la fundamentación del acto administrativo constituye una garantía fundamental del procedimiento sancionatorio, derivada del derecho de defensa protegido por el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental.

En particular, sostiene que en las resoluciones impugnadas no se expresa cómo se determina la cuantía de la sanción, su peso específico en la fórmula de cálculo, haciendo imposible conocer las razones por las cuales se llega a la cifra que impone.

Como quinta y última ilegalidad, denuncia la improcedencia de calificar como gravísima la infracción atribuida a Enel, vulnerando con ello el artículo 15 N° 4 de la Ley N° 18.410, pues no se ha producido una afectación de a lo menos el 5% de los usuarios abastecidos.

Asevera que, el número total de usuarios de las comunas en cuestión es de 399.833, de los cuales, solo 328.826 sufrieron alguna interrupción, equivalente a un 16,13% del universo total de usuario abastecidos por Enel, de los cuales 85.227 superaron el tiempo máximo de interrupciones en horas admitido por la Norma Técnica para el año 2020, lo que equivale a un 4,18% de los usuarios abastecidos por Enel Distribución, por lo que la infracción



no puede calificarse de gravísima, por no alcanzar el porcentaje mínimo exigido por el artículo 15 N° 4 de la Ley N° 18.410.

En subsidio, alega la errónea apreciación de las circunstancias del artículo 16 de la Ley N° 18.410, cuya correcta consideración exige una disminución sustancial de la multa.

En este sentido, señala que el referido artículo 16 establece como circunstancias a considerar para aplicar las sanciones: a) la importancia del daño causado o del peligro ocasionado; b) el porcentaje de usuarios afectados por la infracción; c) el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción; d) la intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma; e) la conducta anterior, y f) la capacidad económica del infractor, especialmente si se compromete la continuidad del servicio prestado por el afectado.

En relación con la importancia del daño causado o del peligro ocasionado, señala que la Superintendencia estima que las compensaciones pagadas por Enel a sus usuarios, por indisponibilidad de suministro, no constituye una circunstancia atenuante, sino un ahorro a beneficio de la empresa y en directo perjuicio de sus clientes, lo cual resulta improcedente, pues corresponde al cumplimiento de una obligación legal (artículo 16 B de la Ley N° 18.410), y de la cual no se beneficia.

Respecto al porcentaje de usuarios afectados por la infracción, reitera que la cifra real de usuarios afectados es considerablemente menor a la que tuvo a la vista la



Superintendencia al momento de fijar la multa, por lo que ésta debe ser corregida proporcionalmente.

Sostiene, por otra parte, que la supuesta infracción no generó beneficio económico alguno a Enel, sino costos: la electricidad que no pudo vender y los de restablecimiento del servicio.

Sobre la intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación, señala que Enel no sólo no cometió falta alguna de diligencia, sino que en ningún caso ha tenido intencionalidad en su comisión, esto es, el afán cierto y evidente de incurrir en la infracción, que equivale al dolo, y que la Superintendencia no acreditó; por lo que debió considerar la falta de intencionalidad como circunstancia para reducir la sanción.

A lo anterior cabe agregar, sostiene, que la principal causa de la excedencia en los índices sancionados fue la extraordinaria y excepcional situación que se vivió por la pandemia y los tres niveles de impacto en que afectó la operación de Enel, circunstancia que por sí sola forzaba a disminuir la sanción.

En relación a la circunstancia relativa a la conducta anterior, sostiene que las excepcionalísimas circunstancias del período, impiden compararlo con el anterior, como lo hace la Superintendencia al establecer la reincidencia para agravar la multa, por lo que estima que se ha considerado ilegalmente.

Respecto a la capacidad económica del infractor, en las resoluciones solo se hace referencia a los ingresos por actividades



ordinarias, y omite gastos, inversiones, costos de operaciones, etc., antecedente insuficiente para reflejar la realidad económica de Enel, especialmente ante las dificultades enfrentada por la pandemia y medidas excepcionalísimas que la afectaron, como la prohibición absoluta de corte a clientes impagos dispuesta por la Ley N° 21.249 y sus sucesivas prórrogas. Añade, que entre 2019 y 2021 sus utilidades disminuyeron en más de un 85% (de MM\$118.777 en 2019 a MM\$16.667 en 2021), y debió considerarlo para disminuir la multa.

Afirma que esta circunstancia debió ser ponderada para disminuir la multa, no para agravarla; máxime si se considera que la multa de 43.200 UTM representa un 14,92% de las utilidades del año 2021.

Finalmente, como indicativo de las insuficiente consideración de las circunstancias contempladas en el artículo 16 de la Ley N° 18.410, acusa el manifiesto error de hecho de la Resolución N° 35.447, al efectuar un escueto análisis de las circunstancias relativas a la intencionalidad y participación en los hechos y a la capacidad económica de otra empresa eléctrica (CGE S.A.), añadiendo un nuevo vicio al acto.

Conforme a lo anterior, solicita se deje sin efecto la multa reclamada y la resolución que la confirma; en subsidio, dejar sin efecto la multa, reenviándola a la Superintendencia, para efectos de evaluar la conducta de la reclamante y rebajar proporcionalmente la multa; en subsidio, dejar sin efecto la calificación de “gravísima” de la infracción, debiendo ser calificada entonces como infracción



“leve” y reducir su cuantía en lo que corresponda, con el tope máximo de 500 UTA (6.000 UTM). En subsidio de lo anterior, rebajar proporcionalmente la multa atendiendo a la ilegal consideración de las circunstancias que indica el artículo 16 de la ley 18.410.

Segundo: Que infirma la reclamada, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, solicitando se rechace el reclamo, por ser infundado, aunado a que su actuar se ha ajustado a la normativa vigente.

Señala que las resoluciones de la Superintendencia tienen su fundamento en las funciones que le encomienda su normativa orgánica, contenida en la Ley N° 18.410, cuyo artículo 2° previene que su objeto será fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad, para verificar que la calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea la señalada en dichas disposiciones y que las antes citadas operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituyan peligro para las personas o cosas. Por su parte, el Título IV de dicha ley, la faculta para imponer las sanciones que en ella se indican por las infracciones a las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con electricidad, gas y combustibles líquidos, o en incumplimiento de las instrucciones y órdenes impartidas por el Servicio.

Expone que mediante Oficio Circular N° 12.622, de 18 de junio de 2018, remitió a las concesionarias del servicio público de



distribución el Documento Técnico denominado “Consideraciones para el Cálculo del SAIDI y SAIFI”, referido en el artículo 4-2 de la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución (en adelante Norma Técnica), para efectos de determinar el número de clientes afectados en caso de interrupciones de suministro. Luego, por Resolución Exenta N° 27.017, de 31 de diciembre de 2018, se estableció el actual proceso de información denominado “Índices de Continuidad de Suministro”, mediante el cual las empresas de distribución de electricidad deben remitir mensualmente a la Superintendencia la información de interrupciones de suministro eléctrico que afectaron a usuarios conectados a sus instalaciones ocurridas en el mes calendario inmediatamente anterior.

Conforme a lo anterior y la información entregada por Enel Distribución S.A., determinó que esa empresa sobrepasó el límite máximo del SAIDI (tiempo medio de interrupción por cliente) establecido en la normativa vigente, en las comunas de Independencia, con un SAIDI de 6,16 horas; La Cisterna, con un SAIDI de 5,12 horas; Lo Espejo, con un SAIDI de 8,36 horas; Lo Prado, con un SAIDI de 6,92 horas; Maipú, con un SAIDI de 6,07 horas; Pedro Aguirre Cerda, con un SAIDI de 5,47 horas; Quinta Normal, con un SAIDI de 5,73 horas y Lampa, con un SAIDI de 11,41 horas, siendo 5 horas el límite. Y, conforme a ello, por Oficio Ord. N° 93.699, de 8 de noviembre de 2021, formuló a Enel el siguiente cargo: “Incumplimiento de lo establecido en el artículo 4-2 de la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, en relación con los artículos 145° y 221°



del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos y, a su vez, en relación a los artículos 72º-14 y 130º de la Ley General de Servicios Eléctricos, lo que se desprende de la información aportada por la empresa en el proceso denominado “Interrupciones 2018”, la cual indica que se ha sobrepasado el límite máximo del SAIDI establecido en la normativa vigente, en las comunas señaladas en el punto 4 del Oficio antes individualizado”.

Refiere que, presentados lo descargos por Enel, del análisis y ponderación de los antecedentes recabados, se concluyó que correspondía hacer exigible la responsabilidad de Enel respecto de las infracciones imputadas, por lo que, por Resolución Exenta N° 11.969, de 26 de abril de 2022, atendido el carácter gravísimo de las mismas, aplicó a la reclamante la sanción de multa equivalente a 43.200 UTM. Contra esta sanción, la reclamante interpuso recurso de reposición, el que fue rechazado por Resolución Exenta N° 35.447, de 1 de septiembre de 2022, por no aportar antecedentes adicionales distintos a los ya tenidos a la vista.

Respecto a las ilegalidades invocadas, señala que del expediente de investigación aparece con claridad que los hechos constitutivos de las infracciones sancionadas se encuentran debidamente acreditados y que contravienen las disposiciones invocadas en la formulación de cargos, sin que existan dudas por parte de la Superintendencia de la normativa aplicable a los hechos infraccionales, ni del sentido y alcance de dicha preceptiva.

Sostiene que, acorde con la información proporcionada por la propia recurrente a través del proceso “Interrupciones 2018”,



definido en virtud de la Resolución Exenta N° 27.017, de 31 diciembre 2018, se pudo acreditar que, en la Región Metropolitana, las comunas de Independencia, La Cisterna, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Quinta Normal y Lampa, dicha empresa distribuidora sobrepasó el límite máximo del SAIDI establecido en la normativa vigente.

Destaca, además, que la recurrente, en sus descargos, no negó la ocurrencia de la infracción en las comunas afectadas, reconociendo además que para las comunas de Lampa e Independencia tuvieron similar infracción para el límite 2019. Y, en el caso de La Cisterna, no obstante alegar la inexistencia de la infracción, no lo acreditó, por lo que se tuvo constatada la infracción a su respecto.

Afirma que lo anterior es un claro reflejo de que las deficiencias por las que fue sancionada la recurrente efectivamente ocurrieron, en los términos atribuidos en la formulación cargos, por lo que resulta inadmisibles que ahora pretenda desconocer la existencia de infracciones. Y, añade, que todas las alegaciones vertidas en los descargos fueron analizadas y ponderadas, descartándose la configuración de caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo a la regulación aplicable.

Respecto al rechazo injustificado de la influencia del retraso de 10 meses en la dictación del decreto tarifario que hacía exigible nuevos estándares de calidad, alegada por la reclamante, expresa que constituye una situación que estaba en conocimiento de todos los actores involucrados, por lo que no es admisible esa



circunstancia para justificar el bajo rendimiento del SAIDI en 2020, por lo que no se advierte falta de motivación en el acto sanción, como alega la reclamante. Asimismo, que habiendo tenido certeza del reembolso efectivo de las inversiones, la empresa no podía apararse en que solo podía iniciarlas una vez percibidos los montos respectivos, con lo cual asumió el riesgo de la demora y el impacto sobre la calidad del servicio que remuneran los usuarios.

En lo atinente a que la resolución sería ilegal porque incrementaría artificialmente el número de usuarios afectados en las comunas en las que se registró un exceso de SAIDI, precisa que el ámbito geográfico que ha sido objeto de cada una de las investigaciones, está referido a la agrupación de comunas que integran cada una de las regiones servidas por la empresa distribuidora en que se comprobó interrupción del suministro más allá de los límites permitidos por la normativa vigente, afectando a los usuarios de esas comunas, que pagan por recibir un servicio seguro, continuo y de calidad, de manera que el exceso constatado en cada sector geográfico configura una infracción distinta y, por ende, separar la infracción de calidad de suministro por par comuna - empresa, nada tiene de arbitrario, como alega la reclamante, sino que tiene su fundamento en la Norma Técnica, la cual establece estándares aplicables para cada par comuna – empresa, y conforme al principio de economía procedimental del artículo 9 de la Ley 19.880, se decidió agrupar las infracciones a nivel regional.

En cuanto a la calificación de la infracción como gravísima, señala que el ámbito geográfico que ha sido objeto de cada una de



las investigaciones, está referido a la agrupación de comunas que integran cada una de las regiones servidas por la empresa distribuidora en que se comprobó interrupción del suministro más allá de los límites permitidos por la normativa vigente, afectando a los usuarios de esas comunas, que pagan recibir un servicio seguro, continuo y de calidad, de manera que el exceso constatado en cada sector geográfico configura una infracción distinta y, por ende, no se han contravenido principios constitucionales ni legales, como alega la reclamante.

Señala que el porcentaje de usuarios afectados se calcula teniendo consideración cada comuna afectada en particular servida por la empresa infractora y no el universo total que abastece esa entidad, y que se tuvo en cuenta la duración de las interrupciones de suministro de responsabilidad de la empresa, en las comunas de Independencia, con 6,16 horas; La Cisterna, con 5,12 horas; Lo Espejo, con 8,36 horas; Lo Prado, con 6,92 horas; Maipú, con 6,07 horas; Pedro Aguirre Cerda, con 5,74 horas; Quinta Normal, con 5,73 horas; y Lampa, con 11,41 horas, lo que evidencia una situación particularmente gravosa.

Respecto a la omisión en la resolución de la fórmula empleada para determinar la cuantía de la multa, alegada por la reclamante, señala que ello no es efectivo, pues se indica en ella claramente los elementos considerados para determinarla, en particular, la valorización que las interrupciones implican para los usuarios afectados, así como también las circunstancias que la ley exige considerar. Añade que el considerando 10º analiza minuciosamente las circunstancias concurrentes, en especial, el



daño ocasionado, lo que se obtiene al caracterizar la cuantificación monetaria de la afectación de los clientes por el monto que cada usuario recibe por concepto de pago en compensación por indisponibilidad de suministro.

En lo atinente al monto de la multa y su proporcionalidad, señala que la resolución impugnada ponderó todas las circunstancias que contempla el artículo 16 de la Ley N° 18.410, en particular las invocadas por la reclamante, según consta en su considerando 10°, que condujeron a fijar el valor que se aplicó y no uno mayor, atendida la gravedad de las infracciones.

En cuanto al porcentaje o número de usuarios afectados por la infracción, indica que las interrupciones han alterado la continuidad del servicio más allá de los estándares permitidos por las normas, afectando al 22,6% de los usuarios abastecidos por la reclamante en las comunas ya individualizadas.

Respecto al beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, afirma que se tuvo en cuenta que la reclamante ha ejecutado el 100% del plan de inversión regional, concluyéndose que no obtuvo un beneficio económico, por lo que se dejó constancia en la resolución que si el grado de ejecución hubiese sido menor, la sanción habría sido mayor.

En lo referente a la intencionalidad y grado de participación, expresa que se tuvo presente que la actora es una empresa distribuidora que participa en una actividad económica que se caracteriza por su tecnificación y especialidad y que, por tanto, el desarrollo de la misma requiere no sólo de altas inversiones sino



también de un alto grado de conocimiento de dicha función. Por ello se consideró que ésta estuvo en conocimiento de que incumplía las exigencias de Calidad de Suministro, pues es quien opera sus instalaciones y está en plena consciencia de las características técnicas de las mismas, sabiendo o debiendo saber, en razón de su actividad, de la afectación a los usuarios finales y el perjuicio que les significaba, no siendo atendible alegar desconocimiento o que requiera de actos, tecnologías o cambios que exceden sus capacidades o esfuerzos normales.

Respecto a la conducta anterior, señala que se tomó en consideración que este es el segundo proceso de fiscalización del indicador SAIDI, y que en el primero la reclamante ya fue sancionada por interrupciones, por lo que se consideró reincidente para determinar el monto de la multa.

Afirma que las alegación de la reclamante fundadas en influencia de la pandemia y las medidas sanitarias asociadas a su control, no explican su desempeño, pues sus trabajadores fueron clasificados como esenciales y disponían de permisos colectivos para cumplir sus funciones.

Sostiene que se ponderó la capacidad económica de la reclamante, dejando asentado la resolución que la ejecución, operación, mantenimiento y administración de proyectos eléctricos de distribución de la envergadura de los que posee, requieren de altas inversiones y gastos, y dan cuenta de una empresa robusta en términos financieros. Añade, que la capacidad económica de la reclamante se ve reflejada en su última Memoria Anual 2021 y



Estado de Resultados, por lo que la sanción no compromete su operación.

En lo referente a la afectación del principio de proporcionalidad alegado, arguye que la resolución se encuentra debidamente fundada y aplica todos los parámetros normativos para determinar la sanción y su quantum, particularmente considerando la idoneidad y necesidad de la medida impuesta, al no existir otro medio para exigir el cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente y aplicando una sanción dentro de los límites establecidos, la cual se ha justificado suficientemente.

Señala que es la ley la que establece los rangos dentro de los que pueden fluctuar las multas que aplique la Superintendencia, los que han sido respetados por la resolución, no siendo desproporcionado el ejercicio de la potestad sancionadora en este caso, siendo improcedente la disminución de la multa que pide la recurrente. A este respecto, la Ley N° 18.410 establece que las infracciones gravísimas pueden ser sancionadas hasta en 10.000 UTA, es decir 120.000 UTM, por lo que la multa de 43.200 UTM aplicada, se encuentra dentro de rango. Añade que, si se analizan los 6 elementos que impone considerar el artículo 16 para de determinar una sanción, 5 de ellos tenían un impacto particular: la cuantía del daño generado a los clientes regulados; el beneficio percibido por la empresa (que solo realiza una porción menor de las inversiones que ella misma solicitó a la Comisión Nacional de Energía para dar cumplimiento a sus obligaciones en cuanto al SAIDI y SAIFI, y que fueron remuneradas por los clientes); que esto afectó al 40% de los clientes de la empresa en las comunas en



donde se comprobó la infracción; que tiene conocimiento de sus obligaciones; y su excepcional capacidad económica, todo lo cual justifica la cuantía de la multa aplicada.

Sostiene que la Superintendencia se ha ajustado a la legalidad y a los antecedentes recabados o hechos valer durante la investigación, respetándose el debido proceso, formulándose cargos precisos, permitiéndose el derecho de defensa y atendiéndose las alegaciones de la fiscalizada, sin que los argumentos esgrimidos por la reclamante aporten elementos que pudieran poner en duda la existencia de la infracción.

Tercero: Que, en síntesis, de los antecedentes del reclamo, se advierte que resultan ser hechos no controvertidos en el conocimiento de la presente acción:

1. Que con fecha 8 de noviembre de 2021, la reclamada formuló cargos a Enel Distribución Chile S.A. por haber incumplido los estándares de calidad de suministro que establece el artículo 4-2 de la Norma Técnica de Calidad de Servicios de Distribución, en relación con los artículos 145 y 221 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos y, a su vez, en relación a los artículos 72-14 y 130 de la Ley General de Servicios Eléctricos, al haber excedido uno de los índices de continuidad de suministro vigente (tiempo medio de interrupción por cliente, SAIDI), para el período enero a diciembre de 2020, en ocho comunas de la Región Metropolitana de Santiago. En concreto, en Independencia la red sobrepasó el límite de 5 horas que corresponde a esa comuna, con un SAIDI de 6,16 horas; en



La Cisterna registró un SAIDI de 5,12 horas, siendo el máximo de 5 horas; en Lo Espejo registró un SAIDI de 8,36 horas, siendo el máximo de 5 horas; en Lo Prado registró un SAIDI de 6,92 horas, siendo el máximo de 5 horas; en Maipú registró un SAIDI de 6,07 horas, siendo el máximo de 5 horas; en Pedro Aguirre Cerda registró un SAIDI de 5,74 horas, siendo el máximo de 5 horas; en Quinta Normal registró un SAIDI de 5,73 horas, siendo el máximo de 5 horas; y en Lampa registró un SAIDI de 11,41 horas, siendo el máximo de 9 horas. Se le imputa haber infringido los artículos 4-2 de la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución; 145 y 221 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos; y 72-14 y 130 de la Ley General de Servicios Eléctricos.

2. Que el día 7 de diciembre de 2021 la reclamante presentó sus descargos, rechazando las imputaciones de la Superintendencia.

3. Que con fecha 26 de abril de 2022 mediante Resolución Exenta N° 11.969 la Superintendencia de Electricidad y Combustible sancionó a la actora, con multa de 43.200 UTM.

4. Que con fecha 11 de mayo de 2022, la sancionada interpuso recurso de reposición en contra del respectivo acto terminal, resolviéndose por la reclamada con fecha 1 de septiembre de 2022, mediante Resolución Exenta N° 35.447, confirmándose la sanción impuesta.

Cuarto: Que, en primer término, en cuanto al marco legal aplicable para el conocimiento de este recurso de reclamación, es dable señalar que aquél es de derecho estricto, en el que no se



pueden modificar los presupuestos fácticos acreditados en sede administrativa, sino analizar la legalidad del actuar de la recurrida y si aquélla se encuentra conforme al ejercicio de sus facultades conforme a la legislación vigente. Así lo ha razonado la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 99506-2020, al señalar en su considerando sexto que “...el reclamo de ilegalidad en análisis constituye un mecanismo de revisión de la actividad administrativa sancionadora sectorial eléctrica, que tiene como principal característica ser de derecho estricto, es decir, su finalidad se restringe a la revisión de la juridicidad, tanto adjetiva como sustantiva, del actuar de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, sin que sea posible por esta vía variar los presupuestos fácticos que fueron determinados en sede administrativa”, y agrega en el considerando octavo que “Como consecuencia de aquella restricción, en la revisión de un procedimiento administrativo sancionatorio el órgano jurisdiccional sólo podrá alterar la intensidad del castigo cuando la Administración haya omitido toda fundamentación respecto los parámetros que la ley prescribe para su determinación concreta, o cuando los motivos explicitados en el acto para tal fin no se condicen con los hechos asentados en el sumario que le dio origen.”

Quinto: Que, para el adecuado análisis y decisión del reclamo deducido, resulta conveniente recordar las normas que conforman el ordenamiento eléctrico, por cuya observancia debe velar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con arreglo a lo establecido en el artículo 2° de su Ley Orgánica, N°



18.410 de 1985, que le encomienda la función de fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y normas técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad para verificar que la calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea la señalada en dichas disposiciones y que tales operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituye un peligro para las personas o cosas.

De acuerdo al artículo 3° N° 34 de la Ley N° 18.410, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles está facultada para aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales y reglamentarias cuyo cumplimiento le corresponde vigilar e impartir instrucciones de carácter general a las empresas y entidades sujetas a su fiscalización. A su vez, el artículo 130 de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenida en el D.F.L. N°4/20018, de 2006, del Ministra de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. N° 1 de 1982, de Minería, dispone: “La calidad de servicio de las empresas distribuidoras de servicio público que operen en sistemas cuyo tamaño es superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación, en cuanto a tensión, frecuencia, disponibilidad y otros, corresponderá a estándares normales con límites máximos de variación que serán los que determinen los reglamentos”. En concordancia con la norma citada, la letra e) del artículo 323 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, aprobado por Decreto N° 327, de 1997, de Minería (en adelante, Reglamento Eléctrico), establece:



“Las infracciones e incumplimientos de las normas legales, reglamentarias y técnicas en materia de electricidad, como asimismo de las instrucciones y órdenes que imparta la Superintendencia, serán castigados con alguna de las sanciones establecidas en el reglamento de sanciones, sin perjuicio de otras contempladas en el ordenamiento jurídico. Entre otras, serán sancionadas las siguientes infracciones e incumplimientos: e) El incumplimiento de los estándares de calidad de servicio y suministro, establecidos por disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas, para las actividades de generación, transmisión y distribución”. Por su parte, el número 4) del inciso tercero del artículo 15 de la Ley 18.410 señala: “Son infracciones gravísimas los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que alternativamente: 4) Hayan alterado la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio respectivo, más allá de los estándares permitidos por las normas y afecten a lo menos al 5% de los usuarios abastecidos por la infractora”. Para el caso en estudio, el artículo 145 del Reglamento Eléctrico prescribe: “Las empresas concesionarias de servicio público de distribución deberán suministrar electricidad a sus usuarios de manera continua e ininterrumpida, salvo las excepciones legales y reglamentarias”. Así, el artículo 221 del mismo reglamento dispone: “Los concesionarios de servicio público de distribución son responsables del cumplimiento de los estándares y normas de calidad de servicio que establece la ley y este reglamento. Todo aquel que proporcione suministro eléctrico, tanto en generación, transporte o distribución, sea concesionario o no, será responsable del cumplimiento de los estándares de calidad de



suministro que establecen este reglamento y las normas técnicas pertinentes”; y la letra h) del artículo 222 del citado cuerpo normativo define: “La calidad de servicio es el conjunto de propiedades y estándares normales que, conforme a la ley y el reglamento, son inherentes a la actividad de distribución de electricidad concesionada, y constituyen las condiciones bajo las cuales dicha actividad debe desarrollarse. La calidad de servicio incluye, entre otros, los siguientes parámetros: h) La continuidad del servicio”.

De igual modo, debe tenerse presente el artículo 72-14 de la Ley General de Servicios Eléctricos, prescribe que: “Los coordinados serán responsables individualmente por el cumplimiento de las obligaciones que emanen de la ley, el reglamento, las normas técnicas que dicte la Comisión y de los procedimientos, instrucciones y programaciones que el Coordinador establezca”. Por su parte, el artículo 72-19 de la misma ley establece que la Comisión Nacional de Energía “... fijará, mediante resolución exenta, las normas técnicas que rijan los aspectos técnicos, de seguridad, coordinación, calidad, información y económicos del funcionamiento de dicho sector. Para ello, anualmente, establecerá un plan de trabajo que permita proponer, facilitar y coordinar el desarrollo de éstas”.

Por Resolución Exenta N° 706, de 2017, de la Comisión Nacional de Energía, se aprobó Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, que establece las nuevas obligaciones para las compañías de distribución, aborda principalmente las interrupciones de suministro eléctrico y mejora



la calidad de la información que dichas compañías entregan a los clientes. En su artículo 1-1 Objetivo, señala “...en la presente NT se establecen las exigencias que deberán cumplir los concesionarios de servicio público de distribución de electricidad y las empresas que sean propietarias, arrendatarias, usufructuarias o que operen, a cualquier título, instalaciones de distribución de energía eléctrica, ambas en adelante e indistintamente “Empresa(s) Distribuidor(as)” o “Distribuidora(s)”, respecto de: 1. La Calidad de Producto. 2. La Calidad de Suministro. 3. La Calidad Comercial”. El artículo 1-3 Abreviaturas, en su numeral 30 indica que SAIDI corresponde a la “Tiempo medio de interrupción por Cliente (en inglés System Average Interruption Duration Index)”, y el numeral 31 señala que SAIFI corresponde a “Frecuencia media de interrupciones por Cliente (en inglés System Average Interruption Frequency Index). Por su parte, el artículo 4-2 Interrupciones de Suministro Globales, señala que “De acuerdo a la Clasificación de Redes establecida en el Anexo de la presente NT, los indicadores SAIDI y SAIFI no deberán superar los límites siguientes durante cualquier periodo de doce meses consecutivos”, estableciendo para el indicador SAIDI, desde el año 2020 en adelante, los siguientes límites en horas: para densidad de la red alta, 5 horas; para densidad de la red media, 7 horas; para densidad de la red baja, 9 horas; y, para densidad de la red muy baja, 14 horas.

Sexto: Que, se debe tener presente que es la propia reclamante la que informa a la Superintendencia de la interrupción de suministro en las comunas de Independencia, La Cisterna, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Quinta Normal, y



Lampa, conforme al Oficio Circular N° 12.622, de 18 de junio de 2018, denominado "Consideraciones para el Cálculo del SAIDI y SAIFI"; y a la Resolución Exenta N° 27.017, de 31 de diciembre de 2018, por la que se estableció el actual proceso de información denominado "Índices de Continuidad de Suministro". Conforme a ello y a la información entregada por la reclamante, se estableció que, durante el período enero a diciembre de 2020, se sobrepasó el límite máximo del índice SAIDI en las señaladas comunas, esto es, el tiempo medio de interrupción por cliente, según detalle indicado en el numeral 1 del considerando tercero de esta sentencia.

Séptimo: Que, como primer reproche, sostiene el reclamante que la Resolución Exenta N° 11.969, y la Resolución Exenta N° 35.447, que la confirma, infringen el artículo 16, inciso segundo, letra d) de la Ley N°18.410, al no considerar circunstancias relevantes para evaluar la intencionalidad y el grado de participación de Enel en los hechos sancionados, incumpliendo así con la garantía de proporcionalidad en la imposición de sanciones administrativas. En este sentido, asevera que la Superintendencia omitió las circunstancias excepcionálísimas producidas por la pandemia de COVID-19; omitió considerar las múltiples cuarentenas que afectaron a las ocho comunas fiscalizadas, por cerca de 5 meses consecutivos, y sus estrictas restricciones de movilidad; que más de 1.400 contratistas debieron enfrentar cuarentenas, por enfermedad o sospechas de contagios, quedando impedidos de desarrollar sus labores y funciones críticas; que se vio impedida de ejecutar cerca de 50 trabajos en la red de baja tensión, por disminución de 40% del personal de la empresa



que los ejecutaba, a causa de contagios; y el aumento de asentamientos informales y conexiones irregulares en cerca de 3.884 viviendas, en las comunas fiscalizadas. Con lo anterior, asevera que incurre en ilegalidad, al imponer una sanción desproporcionada, vulnerando los deberes de razonabilidad y objetividad, que emanan del principio de imparcialidad, y el deber de emplear medios idóneos de diagnóstico, establecidos en los artículos 11 de la Ley N° 19.880 y 53 de la Ley N° 18.575, respectivamente.

La segunda ilegalidad se habría cometido al incorporar, al momento de calificar y graduar las sanciones que impone, a usuarios no afectados en la calidad y continuidad del suministro eléctrico, infringiendo el numeral 4) del inciso tercero del artículo 15 y la letra b) del inciso segundo del artículo 16, ambos de la Ley N° 18.410, que la obligaban a computar solo a los usuarios afectados. Al respecto, asevera que se consideró y computó 405.007 clientes afectados, en circunstancias que los clientes efectivamente interrumpidos son 328.826, y los clientes realmente afectados según la definición de la Norma Técnica son 85.227. De este modo, se habría impuesto una multa desproporcionada, vulnerando los principios de legalidad y tipicidad.

La tercera ilegalidad se encuentra en la infracción al deber de motivación de los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, por no considerar la circunstancia de que el desempeño irregular de los índices en las comunas fiscalizadas se debía al retraso en la ejecución de inversiones y gastos para fortalecer la red y mejorar la calidad del suministro, a causa la demora de casi 10 meses de la



dictación del Decreto Tarifario 5T, que hacía exigibles los estándares y mediciones de la Norma Técnica de Calidad del Servicio para Sistemas de Distribución, de diciembre de 2017. En este sentido, sostiene que, de haber estado disponible el nuevo esquema tarifario, actualizado a las nuevas exigencias desde la entrada en vigencia de la Norma Técnica, hubiese podido desarrollar oportunamente todas aquellas obras necesarias para ir cumpliendo con los nuevos estándares exigidos en ella, sin comprometer la eficiencia que persigue el modelo de tarificación.

La cuarta ilegalidad estaría dada por la infracción del deber legal de fundamentar la metodología numérica de la sanción impuesta, cuya lógica sería desconocida, irreproducible e imprevisible para quien la sufre, lo que tornaría en ilegal la sanción impuesta. A este respecto, la Superintendencia se habría limitado a evaluar las circunstancias señaladas en el inciso segundo del artículo 16 de la Ley N°18.410, sin aportar antecedentes respecto a la forma precisa en que ponderó tales circunstancias, faltando así al deber de promover el conocimiento de los fundamentos de sus decisiones, comprometiendo el derecho a defensa de la reclamante.

Como quinta ilegalidad, alega que la infracción no puede calificarse de gravísima, ya que no se alcanzaría el porcentaje de 5% de usuarios afectados exigido por el artículo 15 N° 4 de la Ley N° 18.410, atendido que de los 328.826 clientes afectados en las comunas fiscalizadas, solo 85.227 superaron los límites TIC (tiempo de interrupciones a clientes), que equivale a un 4,18% de los usuarios abastecidos por Enel.



En subsidio, alega una errónea apreciación de las circunstancias del artículo 16 de la Ley N° 18.410, en cuanto a la importancia del daño causado o del peligro ocasionado, que hace procedente la disminución de la multa.

Octavo: Que, en relación al primer reproche que contiene el reclamo, basta considerar para rechazarlo que, en lo concerniente a la evaluación de la intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma, que prescribe el artículo 16, inciso segundo, letra d) de la Ley N° 18.410, se tuvo presente por la reclamada que la actora es una empresa distribuidora que participa en una actividad económica que se caracteriza por su tecnificación y especialidad y que, por tanto, el desarrollo de la misma requiere no sólo de altas inversiones sino también de un alto grado de conocimiento de dicha función. En este sentido, se constata que la reclamada tuvo en especial consideración que la infractora estuvo en conocimiento de que incumplía las exigencias de calidad de suministro, al ser ella quien opera sus instalaciones y conoce sus características técnicas, sabiendo o debiendo saber, en razón de su actividad, de la afectación a los usuarios finales y el perjuicio que les significaba, sin que resulte atendible alegar su desconocimiento o que requiera de actos, tecnologías o cambios que exceden sus capacidades o esfuerzos normales.

Asimismo, conforme a lo precedentemente señalado, se ha de tener presente que los desempeños que tuvo la empresa durante el período fiscalizado, no se explican por los efectos en la operación del Sistema de Distribución que pudo haber provocado la



pandemia del COVID-19, ni en las medidas sanitarias establecidas para su control, como se expresa en los actos reclamados, atendido que los trabajadores de la empresa fueron clasificados como esenciales y disponían de permisos colectivos que les permitía atender sus deberes asociados a sus funciones, incluyendo entregar un servicio de calidad.

De lo expuesto precedentemente y de los antecedentes que obran en estos autos, aparece que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, al dictar la Resolución Exenta N° 11.969, y la Resolución Exenta N° 35.447, que la confirma, tomó en consideración las circunstancias contenida en el inciso segundo del artículo 16 de la Ley N° 18.410, y en particular las referentes a la intencionalidad y el grado de participación de la letra d) del señalado artículo, relacionadas con la pandemia de COVID-19, para los efectos de determinar la sanción que se impuso a la reclamante, descartándose así la consecuencial vulneración de la garantía de proporcionalidad, así como de los deberes de razonabilidad y objetividad sostenidas por la actora.

Por lo tanto, sólo cabe concluir que la reclamada ha actuado con estricto apego a la normativa que la rige, descartándose, en consecuencia, este capítulo de ilegalidad denunciado por la reclamante.

Noveno: Que, en lo que respecta a la segunda ilegalidad denunciada, consistente en que el acto impugnado incrementaría artificialmente el número de usuarios afectados en cada una de las ocho comunas en las que se registró un exceso de SAIDI, en



contravención a la normativa aplicable, se ha de tener presente que el ámbito geográfico que ha sido objeto de cada una de las investigaciones, está referido a la agrupación de comunas que integran cada una de las regiones servidas por la empresa distribuidora en que se comprobó interrupción del suministro más allá de los límites permitidos por la normativa vigente, afectando a los usuarios de esas comunas, que pagan por recibir un servicio seguro, continuo y de calidad, de manera que el exceso constatado en cada sector geográfico configura una infracción distinta y, por ende, separar la infracción de calidad de suministro por par comuna - empresa, nada tiene de arbitrario, como sostiene la actora.

El estándar exigible para la determinación del tiempo medio máximo de interrupción según densidad de la red es por comuna, para lo cual corresponde utilizar la clasificación par comuna-empresa y, en consecuencia, la evaluación se realiza a ese nivel, conforme a lo establecido en la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, aprobada por Resolución Exenta N° 706 de 2017, de la Comisión Nacional de Energía, la cual dispone estándares aplicables para cada par comuna-empresa. Por ello, se ha determinado correctamente por la autoridad fiscalizadora que la infracción cometida por la reclamante ha afectado al 22,6% de los usuarios abastecidos por ella en las comunas de Independencia, La Cisterna, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Quinta Normal y Lampa, alterado la continuidad del servicio más allá de los estándares permitidos por las normas.



Conforme a lo anterior, se desestimaré la infracción del numeral 4) del inciso tercero del artículo 15 y de la letra b) del inciso segundo del artículo 16, ambos de la Ley N° 18.410, denunciada por la reclamante.

Décimo: Que, respecto de la tercera ilegalidad denunciada, es del caso señalar que, conforme aparece de los antecedentes, contrario a lo argüido por la reclamante, la Superintendencia ha dado cabal cumplimiento al deber de motivación estatuido en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, al desestimar la influencia en los índices SAIDI en las comunas fiscalizadas que la actora atribuye al retraso en la dictación del Decreto Tarifario 5T, publicado el 28 de septiembre de 2018, para lo cual la reclamada se funda en que dicha situación estaba en conocimiento de todos los actores involucrados, siendo inadmisibles excepcionarse de la aplicación de los estándares que le son exigibles aparándose en la circunstancia de que solo podía dar inicio a la inversiones una vez percibidos los montos respectivos, en circunstancias que tenía certeza de su reembolso, sin mostrar los niveles de diligencia esperables en cuanto a ir realizando las gestiones, para dar cumplimiento a los estándares que sabía que resultarían aplicables; todo lo cual demuestra que la actora asumió el riesgo de la demora y su impacto sobre la calidad del servicio que perciben y remuneran los usuarios.

En el mismo sentido, cabe tener presente lo explicitado por la recurrida en motivo 8° de la Resolución Exenta N°11.969, cuando señala que “...esta Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante el Oficio Circular N° 2381 de fecha 13 de



marzo de 2020, en el contexto de la pandemia y previo a la declaración del estado de catástrofe, instruyó a las empresas adoptar las medidas pertinentes para preservar la seguridad y continuidad de las operaciones. En dicho sentido, si la empresa sabiendo que el número de horas del estándar SAIDI se reduciría para el 2020, no podía pretender ejecutar las acciones durante el año, so pena del riesgo que asumía, ya sea con o sin pandemia, de que dicha demora en la implementación (en vez de haberlas ejecutado durante el 2019) tuviese un impacto en los resultados de la misma, con afectación hacia los usuarios. Por tanto, dicha línea argumental de que resultó difícil sobrellevar el año 2020, ya demuestra que la empresa en cuestión no actuó diligentemente, pretendiendo solo el año en cuestión ejecutar los proyectos de mejoras, que debieron haber estado en operación con antelación”.

Por lo anterior, se constata que la autoridad recurrida, al desestimar la alegación de la concesionaria infractora, expresó las razones para ello, por lo que esta Corte no advierte la falta de motivación en el acto sanción alegada por la reclamante, razón por la cual se descartará el tercer capítulo del arbitrio.

Undécimo: Que la cuarta infracción que se denuncia por la actora, acerca de que la resolución omite indicar la metodología numérica empleada para determinar la multa, se constata en el propio acto recurrido que se ha considerado la valorización que las interrupciones implican para los usuarios afectados y las demás circunstancias que la ley exige tomar en cuenta.



En efecto, del tenor del considerando 10° de la Resolución Exenta N°11.969, se verifica que ésta analiza minuciosamente las circunstancias concurrentes, en especial, el daño ocasionado, lo que se obtiene al caracterizar la cuantificación monetaria de la afectación de los clientes por el monto que cada usuario recibe por concepto de pago compensación por indisponibilidad de suministro. Aquello se logra mediante la valorización monetaria de la Energía No Suministrada, que es el daño directo por la interrupción, a un costo de falla de corta duración, el que tiene un valor de 13,65 US\$/kWh para el año 2020, superando dieciocho veces el costo de racionamiento utilizado para calcular la compensación que percibe cada usuario por cada unidad de energía no suministrada. De ello se colige que se trata de interrupciones que han alterado la continuidad del servicio, más allá de los estándares permitidos por las normas, afectando negativamente a sus usuarios por la energía no suministrada; sin considerar en ello el daño emergente y/o el lucro cesante al que se vieron afectados los usuarios. Adicionalmente, el daño se genera también a la actividad económica, comercial e industrial, e inclusive a las personas en su diario vivir. En este sentido, se ha considerado que la situación de pandemia del COVID-19 limitó, entre otras, la movilidad de las personas, las actividades educacionales, obligando a la ciudadanía a depender del suministro eléctrico para teletrabajar y estudiar, por lo que el impacto y daño de las interrupciones de suministro, son factores que han incidido significativamente en la determinación de la multa impuesta.



Asimismo, de la propia lectura del referido considerando 10° aparece que la autoridad, para determinar la cuantía de la multa aplicada, ponderó todas las circunstancias establecidas en el artículo 16 de la Ley N° 18.410, sin perjuicio que el indicador SAIDI considera, especialmente, la ubicación de la falla, la intensidad de la misma y los recursos disponibles para la más pronta reposición del suministro. En efecto, aparece del señalado considerando que se tuvo en consideración la importancia del daño causado (letra a), del inciso segundo del artículo 16), referido precedentemente; el porcentaje o número de usuarios afectados por la infracción (letra b), del inciso segundo del artículo 16), que representan 22,6% de los usuarios abastecidos por la empresa recurrente en las comunas fiscalizadas; el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción (letra c), del inciso segundo del artículo 16), respecto al cual se tuvo en consideración que la empresa no obtuvo beneficio, dejándose constancia que por tal razón la sanción no era mayor; la intencionalidad y grado de participación de la empresa (letra d), del inciso segundo del artículo 16), para lo cual se consideró la tecnificación y especialidad de la actividad en que participa, el alto grado de conocimiento en el área, su conocimiento de los incumplimientos y la afectación y perjuicios ocasionados a los usuarios finales; la conducta anterior (letra e), del inciso segundo del artículo 16), atendida su condición de reincidente, al haber sido sancionada por incumplimiento del SAIDI para el período enero a diciembre de 2019; y la capacidad económica de la infractora (letra f), del inciso segundo del artículo 16), calificada como robusta financieramente, sobre la base de su



Memoria 2021 y su Estado de Resultados, publicados en su sitio web y en el de la Comisión para el Mercado Financiero.

Por lo tanto, solo cabe concluir que la reclamada ha actuado con estricto apego a la normativa que la rige, descartándose, en consecuencia, la ilegalidad reprochada.

Duodécimo: Que en lo relativo a la calificación de la infracción como gravísima que la recurrente discute, corresponde desechar también tal alegación, por cuanto el ámbito geográfico que ha sido objeto de cada una de las investigaciones está referido a la agrupación de comunas que integran cada una de las regiones servidas por la empresa distribuidora en que se comprobó la interrupción del suministro, más allá de los límites permitidos por la normativa vigente, afectando a los usuarios de esas comunas, que pagan por recibir un servicio seguro, continuo y de calidad, de manera que el exceso constatado en cada sector geográfico configura una infracción distinta. Asimismo, para la determinación de la calificación de la infracción como leve, grave o gravísima, el porcentaje de usuarios afectados se calcula considerando cada comuna afectada en particular servida por la empresa infractora y no el universo total que ella abastece. Por su parte, como ya se señaló, el conocimiento conjunto de todas las infracciones en un mismo procedimiento administrativo obedeció al principio de economía procedimental establecido en el artículo 9 de la Ley N° 19.880.

En efecto, la infracción se construye independientemente para cada comuna, donde, por tanto, no estamos frente a una sola,



ya que se requiere analizar la multiplicidad de interrupciones que la afecta.

Por último, se advierte que, para la calificación de la infracción, se ha estado a lo dispuesto en el artículo 15 N° 4 “De las infracciones Gravísimas” de la Ley N° 18.410, que estatuye al efecto: “Son infracciones gravísimas los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que alternativamente: 4) Hayan alterado la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio respectivo, más allá de los estándares permitidos por las normas y afecten a lo menos al 5% de los usuarios abastecidos por la infractora”; y en cuanto al monto de la sanción, a lo dispuesto en el artículo 16 A de la misma ley, que prescribe: “Sin perjuicio de las sanciones que establezcan leyes especiales, las infracciones tipificadas precedentemente podrán ser sancionadas con: 1.- Multa de hasta diez mil unidades tributarias anuales, revocación de autorización o licencia, comiso o clausura, tratándose de infracciones gravísimas, conforme a lo establecido en el artículo 15.”

De esta forma, para el caso en particular la infracción cometida por Enel ha afectado al 22,6% de los usuarios abastecidos por la reclamante en las comunas fiscalizadas: Independencia, La Cisterna, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Quinta Normal, y Lampa.

Décimo Tercero: Que, en razón de lo expresado en los motivos precedentes, no resultan atendibles las peticiones subsidiarias de reenvío a la reclamada para la evaluación de la



conducta de la actora y rebaja de la multa, como también la de recalificación de la entidad de la infracción.

Finalmente, tampoco resulta procedente rebajar el monto de la multa aplicada, por estimarse que existe proporcionalidad entre la que ha sido impuesta y la gravedad de la infracción, por las razones anteriormente expresadas.

Décimo Cuarto: Que, de acuerdo a lo expuesto, se concluye que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles supeditó su actuar conforme a la regulación pertinente en la materia, en razón a que ha procedido dentro del ámbito de sus atribuciones, mediante actos fundados que informan adecuadamente los hechos que los motivan, señalando aquellos que constituyen transgresiones a la normativa vigente e indicando de manera precisa las disposiciones incumplidas, haciéndose cargo de cada una de las defensas hechas valer por la reclamante, respetándose el debido proceso, no avizorándose en consecuencia, ilegalidad en su actuar en la dictación de la Resolución Exenta N° 11.969 de 26 de abril de 2022, confirmada mediante Resolución Exenta N° 35.447 de 1 de septiembre de 2022, razón por la que la reclamación formulada será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley N° 18.410, **se rechaza**, la reclamación interpuesta por don Carlos Freude Moreno, en representación de Enel Distribución Chile S.A., en contra de la Resolución Exenta N° 35.447, de 1 de septiembre de 2022, dictada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que



rechazó su recurso de reposición y confirmó la Resolución Exenta N° 11.969, de fecha 26 de abril de 2022, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Michael Camus Dávila.

N° Contencioso Administrativo-477-2022.



Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz, la ministra señora Jenny Book Reyes y el Abogado Integrante señor Michael Camus Dávila.

No firma la Ministra señora Book, por encontrarse haciendo uso de licencia médica, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltrma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veinte de febrero de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Alejandro Rivera M. y Abogado Integrante Michael Christian Camus D. Santiago, veinte de febrero de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veinte de febrero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.